

Las « comunidades de paz »



Desde hace más de diez años, poblaciones campesinas atrapadas en medio del fuego cruzado de los actores armados (guerrilla, paramilitares, ejército) han elegido la no-violencia y son apoyadas por colectivos de ONGs colombianas y extranjeras.

Frente a la apropiación de sus tierras, los ataques a su medio natural y a sus cultivos, se han organizado colectivamente para defender su no implicación en el conflicto y abrir una vía hacia la democracia y la paz.

Las comunidades de paz viven de manera autónoma y reagrupan unas 5 000 personas. Pero a menudo, sus miembros han pagado muy caro su posición de principios; esas “comunidades en resistencia” son desde hace años objeto de ataques llevados a cabo por las fuerzas de seguridad colombianas, los paramilitares y los movimientos de guerrilla.

La más conocida entre estas comunidades es la de San José de Apartadó, fundada en Marzo de 1977. Desde entonces más de 170 de sus miembros han sido asesinados o víctimas de desaparición forzada. En el 2009, la comunidad conmemoró el cuarto aniversario de la masacre contra ocho de sus miembros ocurrida el 21 de febrero de 2005. Las investigaciones judiciales concluyeron que están implicados agentes de las fuerzas de seguridad y paramilitares en esos asesinatos.

¿Una Visión parcial de Colombia?

¡Sí! Efectivamente estas cuantas páginas no dan una idea completa de ese país, tan cautivador en muchos aspectos.

Son simplemente algunas fotos, algunas cifras que describen situaciones reales - a menudo mencionadas igualmente en la prensa colombiana e internacional –y que atañen a la situación humanitaria del país.

Pero hay que conocer dichas cifras y dicha situación, para poder aprehender la complejidad del problema que nos preocupa: la liberación de miles de secuestrados aún detenidos en Colombia y, de una manera general, la solidaridad con las innumerables víctimas de la violencia en dicho país



Los colombianos son casi 44 millones de personas entre los cuales, su gran mayoría- igual que los europeos unos decenios atrás- no sueña más que con la paz y la reconciliación.

Es una nación que, como otras, sabe también sobresalir en la escena internacional en diferentes campos: el arte, la literatura, la ciencia, el deporte...

Desgraciadamente, existe también una realidad que, difícil de admitir algunas veces, empaña la imagen de este país. Para combatirla, es preciso conocerla antes, reconocerla, comprenderla...

Colombia: una democracia obstaculizada



Colombia, dos veces más grande que Francia, es rica en formidables recursos naturales y humanos. Pero es un país rico poblado de pobres: 15.000 personas poseen más del 61% de las riquezas del país y el 55% de los 44 millones de habitantes no alcanzan a ganar ni siquiera el salario mínimo.

Es un país en el que las gentes se sienten felices y lo proclaman, pero es un país en el que reina la violencia: allí se cometen unos quince mil homicidios al año – la primera causa de muerte en los hombres adultos. Cuatro mil es el número estimado de pistoleros a sueldo al servicio de los traficantes de droga.

Pues Colombia es el mayor productor mundial de cocaína (300 a 700 toneladas al año) – con un aumento en la producción de heroína: 7 mil millones de dólares al año, dinero sucio que a menudo se lava en nuestros países.

Aunque oficialmente la prensa es libre, ese país cuenta con el mayor número de periodistas asesinados en el mundo: entre 1985 y 2006 han matado por lo menos 114 de ellos. Estos crímenes se atribuyen a los narcotraficantes, a los paramilitares y a la guerrilla y por regla general permanecen en la impunidad.

A pesar de todo, Colombia, oficialmente, está dotada de todos los atributos formales de un régimen democrático; incluso es la democracia más antigua de América del Sur. Pero ¿en un país en donde la corrupción es endémica y alcanza todos los niveles del Estado; en donde el aparato judicial sufre para mantener su independencia y en donde reina un conflicto armado sangriento desde hace unos 50 años, puede haber una verdadera democracia?

La violación como arma de guerra



En Colombia todos los grupos armados : fuerzas de seguridad del gobierno, grupos paramilitares y guerrilleros utilizan la violencia sexual como arma para intimidar y aterrorizar a las mujeres.

A las mujeres las asesinan, persiguen, torturan y las obligan a tomar las armas, exactamente como a cualquier hombre, pero ellas además son víctimas de formas atroces de violencia sexual que se han desarrollado en el conflicto armado, dentro del cual la violación se ha vuelto normal y un arma muy eficaz.

Muchas mujeres se niegan a denunciar formalmente estos crímenes porque tienen miedo a una revancha, vergüenza e incluso temen por sus propias vidas o por la de sus parientes próximos. Además, la falta total de confianza en el sistema judicial colombiano hace que las pocas mujeres que quisieran interponer una denuncia se sientan impedidas de hacerlo.

A raíz de la presión que ejercen las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, el Estado ha llevado a cabo investigaciones sobre 183 casos de violencia sexual contra mujeres dentro del conflicto colombiano. Sin embargo, cuando consideramos que alrededor de dos millones de mujeres han sido desplazadas en Colombia y de ellas una de cada cinco ha sido forzada a abandonar su casa por causa de violencias sexuales, podemos estimar que habría probablemente unos 400.000 casos de crímenes sexuales que han sido cometidos en el país y que permanecen ampliamente impunes.

Los pueblos indígenas: perseguidos



La población indígena cuenta alrededor de un millón de personas, en la cual hay 18 etnias compuestas por menos de 200 miembros y otras 18 con menos de 500 miembros. Se trata de pueblos en vías de extinción y quienes además son víctimas de una lucha por sus territorios y sus riquezas por lo que

son el objetivo de todos los grupos armados del país: militares, paramilitares y guerrilleros.

Tal violencia no es únicamente el resultado de las actividades ligadas al comercio de armas o estupefacientes. Las tierras de los indígenas son codiciadas para la realización de proyectos agroindustriales y de explotación minera y por eso con tácticas como las masacres, se les constriñe al desplazamiento forzoso.

El ejército los sitia obligándolos a cooperar en la lucha contra las FARC, luego los asesinan: las FARC porque cooperan con el ejército y los paramilitares al servicio de intereses económicos y políticos. Acosados por narcotraficantes y comerciantes de armas, a los indígenas no les queda otra elección que la de abandonar sus pueblos.

Sin embargo, se han promulgado leyes, hechas constitucionales, para mejorar la suerte de los mismos. Estas leyes estipulan que los indígenas representan la autoridad en las zonas en la que habitan (las reservas) y que el suelo y subsuelo de dichas regiones les pertenecen.

Mas, el Estado mismo viola su propia Constitución y es frecuente que actores privados ilegales ataquen a los indígenas con el consentimiento, incluso con la autorización simulada del Estado, con la meta de despojarles a ellos sus tierras y riquezas.

Ingrid Betancourt : secuestrada durante más de seis años.



Ingrid Betancourt : secuestrada por la guerrilla de las FARC desde febrero de 2002, fue liberada en julio 2008 en una operación de los servicios secretos colombianos, de la cual aún no se conoce más que la verdad “oficial”.

Su cautiverio originó otra mirada hacia Colombia; ella dio un nombre y un rostro a más de 3.000 secuestrados cuya suerte antes no parecía importarle a nadie, incluso dentro de su país.

La movilización alrededor de este caso generó un problema político, el de la responsabilidad y la negociación, pero antes que todo un problema humano, el de la solidaridad indispensable.

Más de 3.000 secuestrados en Colombia



Un verdadero escándalo humanitario y por consiguiente político: miles de hombres, mujeres y niños - algunas veces nenes - están, aún hoy día, secuestrados en Colombia.

La mediatización que se creó alrededor de Ingrid Betancourt ha falseado en Europa la imagen de esta calamidad. Aquí muchos imaginan que los secuestrados son rehenes, a menudo políticos y que se hallan detenidos, en su mayoría, por las FARC.

En realidad, salvo raras excepciones, todos los secuestrados son rehenes puramente "económicos". Los capturan bien bandas criminales, bien uno u otro grupo armado ilegal y sólo recuperan la libertad si sus familias pagan un rescate, cuantioso muchas ocasiones.

Se cree que las FARC y el ELN (otra guerrilla marxista) retienen, hoy día, de 700 a 800 personas. El resto ha sido secuestrado por delincuentes sin ninguna motivación política. De un 10 a un 20% de cautivos tendría menos de 18 años.

Los testimonios de aquéllos que han sido liberados y, - como es el caso de los rehenes « políticos » de las FARC - los vídeos enviados por los secuestradores mismos como pruebas de vida, muestran de manera evidente como en la casi totalidad de casos, los secuestrados están detenidos en condiciones espantosas, desnutridos, privados de atención médica, a veces encadenados como animales u obligados a sobrevivir en espacios exigüos durante largos períodos.

Los defensores de Derechos Humanos: amenazados.



En toda Colombia, aun en las regiones más aisladas, los defensores de los Derechos Humanos hacen su trabajo con mucha valentía. Gracias a ellos, las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese país han sido reveladas a la luz pública.

Pero se ha creado toda una atmósfera de miedo para desanimarlos. Estos militantes son objeto de muchas amenazas, actos de intimidación, campañas de difamación etc... Las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares cometen la mayor parte de estos ataques; las guerrillas cometen otras exacciones.

En marzo del 2009, Amnistía Internacional interpeló a las autoridades colombianas. Las acusó de servirse del sistema judicial del país para obstaculizar el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos, quienes son regularmente víctimas de amenazas, agresiones físicas y persecuciones judiciales infundadas. Casi nunca se presentan sus agresores ante la justicia. Estos ataques tienen como objetivo el atarlos e impedirles exponer a la luz pública las violaciones de los derechos humanos y los lazos que existen entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares.

Estos ataques son una característica del conflicto que padece Colombia desde hace más de cuarenta años. Más de una decena de defensores y 46 sindicalistas fueron asesinados sólo en el año 2008.

Miles de « desaparecidos »



Según Amnistía Internacional, “mientras la gran mayoría de países latino-americanos han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único país en donde la desaparición forzada es un evento continuo y periódico”

El número de personas que « han desaparecido » en Colombia en el transcurso

de los últimos años es mucho más importante de lo que se cree. En el 2000 la justicia había investigado 3.500 “desapariciones”. En el 2008 el número aumentó a 15.600. La FIDH (Federación Internacional de Ligas por los Derechos Humanos) y otras ONG, actualmente, citan cifras de más de 30.000.

Detenidas por la policía, el ejército o los paramilitares debido a sus actividades sociales o sindicales, a sus acciones por la defensa de los Derechos Humanos o por su presunto apoyo a la guerrilla, estas personas han desaparecido sin dejar huellas. Se estima que hoy día se sigue produciendo una desaparición forzada cada dos días.

Otro tipo de « desaparición » descubierta recientemente: los « falsos positivos ». En el 2009 se investigó sobre un millar de casos que implicarían casi 2.000 personas secuestradas por las fuerzas de seguridad, luego asesinadas después de haberlas vestido con uniformes de la guerrilla.

Los secuestrados « canjeables »



Políticos, representantes elegidos, militares, representantes de alguna autoridad pública son quienes, en medio de todos los cautivos, constituyen « una moneda de cambio » que utiliza la guerrilla de las FARC para obtener, a cambio de su liberación, la de varios centenares de guerrilleros encarcelados.

Cuando secuestraron a Ingrid, en febrero de 2002, el número de los rehenes canjeables era de 61. Desde entonces, algunos han logrado evadirse, otros han muerto de enfermedades tropicales y de falta de cuidados sanitarios, a otros más les ha matado el ejército en tentativas de operaciones de rescate o han sido asesinados por sus guardianes..

Desde principios de 2008, algunos de ellos pudieron ser liberados como resultado de una intervención del Presidente Chávez, de Venezuela y de la senadora colombiana Piedad Córdoba. Otra quincena de secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt, fueron liberados en julio de 2008 en una operación de los servicios secretos colombianos.

Los últimos civiles que hacían parte de este grupo de rehenes fueron liberados en febrero de 2009, pero las FARC aún retienen un cierto número de militares y policías a los que consideran prisioneros de guerra. A septiembre de 2009 tienen retenidos a 22, de los cuales los dos más antiguos son: Pablo Emilio Moncayo y José Libio Martínez, retenidos como prisioneros desde el 21 de diciembre de 1997.

El delegado para Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideraba, en septiembre de 2009, que “la utilización del secuestro como método de guerra, el trato cruel, inhumano y degradante de los rehenes y, un cautiverio prolongado podría ser considerado como un crimen de lesa humanidad”.

Única esperanza de las familias: el Acuerdo Humanitario



Hasta febrero del 2009, los secuestrados “canjeables” de las FARC comprendían tanto políticos –como Íngrid Betancourt- como prisioneros de uniforme.

Para los últimos – guerrilleros, soldados y policías - un intercambio de prisioneros puede considerarse como una «simple» aplicación del Derecho Internacional Humanitario. En Colombia, en el pasado, tales intercambios entre gobierno y guerrilla, han ocurrido en varias ocasiones.

Pero este intercambio no podía, en ningún caso, comprender a los políticos pues ellos son civiles. Desde 2008, y bajo el impulso de la senadora Piedad Córdoba y el grupo de intelectuales de “Colombianos por la Paz” todos los civiles políticos, rehenes de las FARC han sido liberados sin contraprestación alguna.

Sin embargo, en este momento, desgraciadamente, la conclusión de un acuerdo humanitario sigue siendo muy improbable: si las FARC han manifestado su voluntad de negociar y ya han abandonado la mayor parte de sus exigencias iniciales (creación de una zona desmilitarizada), el gobierno colombiano todavía rechaza cualquier idea de negociación y exige de la guerrilla de las FARC una liberación unilateral de todos sus prisioneros, sin contraprestación.

Un delegado de la ONU manifestó, en septiembre de 2009, que “la utilización del secuestro como método de guerra, el trato cruel, inhumano y degradante de los rehenes y, un cautiverio prolongado podría ser considerado como un crimen de lesa humanidad”.

Más de cuatro millones de desplazados



Desde 1985, bajo la presión de los grupos armados – principalmente de grupos paramilitares pero también guerrillas y ejército colombiano - más de cuatro millones de personas han sido forzadas a abandonar sus domicilios. Más de la mitad de los civiles desplazados son niños.

Las cifras siguen incrementándose: en el 2008, se señalaron oficialmente 380.000 nuevos casos de desplazamiento. Según un informe de Amnistía Internacional, Colombia ocupa a nivel mundial el segundo lugar en materia de desplazamiento de poblaciones, detrás de Sudán.

Entre estos se encuentra una proporción importante de afro-colombianos e indígenas. En muchos casos, se constata que las tierras abandonadas son “recuperadas” para plantar, de manera ilegal pero con la aceptación del Estado, mega plantaciones de palma africana en los territorios colectivos ancestrales de las comunidades campesinas afro-colombianas.

Con el programa de « reinserción rural » puesto en marcha por el gobierno, se corre el riesgo de permitir a los paramilitares “desmovilizados” que mantengan el dominio sobre los millones de hectáreas que han robado. Cientos de miles de personas tendrán pues que elegir entre permanecer lejos de sus lugares o regresar y convivir con aquéllos que los han torturado, violado o que han matado a algunos de sus parientes.

Las fuerzas de Seguridad



Fuertemente apoyadas por los USA y beneficiarios de un presupuesto militar que ya en el 2.007 representaba el 6.1% del PIB (una tasa entre las más altas del mundo – en 1.999 era del 3.6%), las fuerzas de seguridad son, con casi medio millón de combatientes, el ejército más importante y el mejor

equipado de América Latina.

En Colombia, a todos los actores armados, legales e ilegales, se les ha hecho responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos. Desgraciadamente, ése es también el caso de ciertas unidades del ejército las cuales además, mantienen a menudo lazos equívocos con grupos paramilitares de extrema derecha.

Regularmente, las organizaciones no gubernamentales colombianas han denunciado, « violaciones », « asesinatos » y « ejecuciones extrajudiciales » cometidas por el ejército contra los indígenas de ese país.

En el 2.009 estalló el escándalo llamado de « los falsos positivos » : personas raptadas por las fuerzas de seguridad y luego de haberles endosado el uniforme de la guerrilla las han ejecutado, « simplemente » para demostrar que el ejército estaba ganando la “lucha contra el terrorismo”.

De crear el discurso oficial, se trataría de « casos aislados » por los que no se podría encausar a la institución militar. Pero en junio de 2009, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales, acusó claramente al ejército colombiano de haber ejecutado civiles sistemáticamente y, de no admitir la “amplitud” del problema, Según él, “La cantidad misma de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos en el seno del ejército”.

Un conflicto armado que dura 50 años



Este conflicto interno que provoca decenas de millares de víctimas cada año no da lugar a batallas ordenadas pero toma su raíz en las profundas desigualdades sociales, en una cultura de violencia y viejas prácticas políticas.

Es una guerra que no dice su nombre. Según el presidente Uribe quien se alinea en la conjuntura pos 11 de Septiembre y tras el discurso de la “cruzada antiterrorista”, “en Colombia no hay un conflicto armado sino una simple amenaza terrorista”.

Más que una guerra civil es una guerra contra los civiles quienes son las principales víctimas del conflicto que opone la guerrilla al ejército colombiano y a las milicias paramilitares.

Y, es sobre todo una guerra sucia, en la cual todos los actores armados, legales como ilegales, violan el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, menospreciando la vida y dignidad de la población civil.

Las guerrillas de extrema izquierda



Oponiéndose, desde principios de los 60, al orden político y social establecido y predicando la revolución, no supieron tomar la medida de los cambios geopolíticos que han ocurrido en el mundo desde esa época.

Sobreviven especialmente recurriendo al secuestro, al boleteo y la extorsión. Una buena parte de sus recursos provienen del impuesto que recaudan sobre el tráfico de droga.

Los grupos principales son: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) las cuales tuvieron secuestrada a Ingrid Betancourt y mantienen secuestrados a varios “canjeables”, lo mismo que el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Si bien las FARC han sufrido recientemente severos golpes (muerte de su jefe histórico Manuel Marulanda, ejecución de su vocero, Raúl Reyes, por parte del ejército colombiano en territorio ecuatoriano e igualmente la liberación espectacular de Ingrid Betancourt, los tres rehenes norteamericanos y otros 11 rehenes más, por los servicios secretos colombianos), siguen siendo una fuerza todavía temible y bien implantada en el país.

Los paramilitares de extrema derecha



Originarios de las milicias privadas de los grandes terratenientes y narcotraficantes, controlarían el 60% del tráfico de droga en Colombia. Suplentes del ejército para llevar a cabo la « guerra sucia » contra la guerrilla.

Según Amnistía Internacional los paramilitares son responsables del 70% de los ataques a los Derechos Humanos en el país.

Hasta la fecha de hoy, han reconocido haber cometido 21.000 asesinatos (opositores, militantes de izquierda, sindicalistas, indígenas y campesinos...), y se han localizado alrededor de 2.000 fosas comunes. Es una gota de agua en el océano de violencias colombianas, según agencias de protección de los derechos humanos, las cuales manejan estadísticas que sitúan un número más bien cercano a las 70.000 víctimas.

En el 2.005, una ley, « Justicia y Paz », “propuesta” por el presidente Uribe y criticada fuertemente por numerosas organizaciones de defensa de los Derechos del Hombre, les garantiza una gran impunidad a cambio de su desmovilización.

Desde entonces, asistimos a una amplia recomposición del fenómeno paramilitar con los mismos elementos que estuvieron presentes a comienzos de los años noventa: tráfico de droga, extorsión, ejecuciones sumarias, robo de tierras con desplazamiento forzoso e intervención en la gestión del Estado.

Pues los paramilitares han infiltrado ampliamente el medio político en Colombia: en 2.008 estalló el escándalo llamado “de la parapolítica”, el cual implica a unos 80 miembros del Congreso – 90% de los mismos son cercanos al presidente Uribe – perseguidos o condenados por sus lazos con los paramilitares.